



Asamblea General

Distr.
GENERAL

A/42/667
23 de octubre de 1987
ESPAÑOL
ORIGINAL: FRANCES/INGLES

Cuadragésimo segundo período de sesiones
Tema 12 del programa

INFORME DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

Situación de los derechos humanos en el Afganistán

Nota del Secretario General

El Secretario General tiene el honor de transmitir a los Miembros de la Asamblea General el informe provisional sobre la situación de los derechos humanos en el Afganistán, preparado por el Sr. Félix Ermacora, Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos, de conformidad con la resolución 1987/58 de la Comisión, de 11 de marzo de 1987, y con la decisión 1987/151 del Consejo Económico y Social, de 29 de mayo de 1987.

ANEXO

Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Afganistán,
preparado por el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos,
de conformidad con la resolución 1987/58 de la Comisión y con la
decisión 1987/151 del Consejo Económico y Social

INDICE

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
I. MANDATO DEL RELATOR ESPECIAL	1 - 11	3
II. ANTECEDENTES POLITICOS Y EVOLUCION DE LA SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL AFGANISTAN	12 - 29	5
A. Política de reconciliación nacional	13 - 20	5
B. Análisis del proyecto de constitución	21 - 29	9
III. SITUACION DE LOS REFUGIADOS	30 - 37	10
IV. EVALUACION DE LA SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL AFGANISTAN	38 - 105	
A. Situación de los derechos humanos independientemente del conflicto armado	38 - 88	12
1. En las regiones controladas por el Gobierno	40 - 87	14
2. En las regiones no sometidas al control gubernamental	88	21
B. Situación de los derechos humanos como consecuencia del conflicto armado en el Afganistán	89 - 105	24
1. Generalidades	89 - 91	24
2. Pérdidas producidas por bombardeos y otros actos de guerra	92 - 98	25
3. Empleo de minas antipersonal y de juguetes con dispositivos explosivos	99 - 100	27
4. Actos de brutalidad y otros ejemplos de actos de guerra contrarios a las normas humanitarias; derecho internacional	101 - 105	27
V. CONCLUSIONES	106 - 118	28
VI. RECOMENDACIONES	119 - 127	30
		/...

I. MANDATO DEL RELATOR ESPECIAL

1. El Relator Especial, nombrado en 1984 en cumplimiento de la resolución 1984/37 del Consejo Económico y Social, presentó desde entonces tres informes a la Comisión de Derechos Humanos (E/CN.4/1985/21, E/CN.4/1986/24 y E/CN.4/1987/22) y dos informes a la Asamblea General (A/40/843 y A/41/778). Su mandato fue renovado en 1985, 1986 y 1987 por la Comisión de Derechos Humanos en sus resoluciones 1985/38, 1986/40 y 1987/58, respectivamente. La Asamblea General, después de examinar el informe que le presentó el Relator Especial en su cuadragésimo primer período de sesiones, aprobó la resolución 41/158, de 4 de diciembre de 1986, en la cual decidió mantener en examen, durante su cuadragésimo segundo período de sesiones, la cuestión de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el Afganistán. El presente informe ha sido preparado pues en cumplimiento de las disposiciones de la resolución 1987/58 de la Comisión.

2. Durante el 43° período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos el Gobierno del Afganistán, a fin de poner de manifiesto su buena voluntad y de ampliar su cooperación con la Comisión, decidió invitar al Relator Especial a visitar el país. Por consiguiente, dado que su mandato había sido renovado y fiel a la línea de conducta que había seguido siempre en la materia, el Relator Especial dirigió, el 24 de marzo de 1987, una carta al Gobierno del Afganistán en la cual aceptaba su invitación y expresaba su esperanza de que en un futuro próximo pudiesen iniciarse consultas con el Representante Permanente del Afganistán ante las Naciones Unidas para fijar la fecha y las modalidades de la visita. Al respecto, cabe señalar que los preparativos, tanto en lo concerniente al programa propuesto por el Relator Especial como a la duración de la visita y las garantías de seguridad de las personas por él entrevistadas, no fueron sujetos a ninguna condición.

3. Por lo tanto, durante la visita que efectuó al Afganistán del 30 de julio al 9 de agosto de 1987, el Relator Especial se reunió, con arreglo al programa establecido, con representantes oficiales de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Justicia, de Refugiados Repatriados, de Asuntos Tribales, de Economía Nacional, de Salud Pública, de Estadísticas, del Interior y de Seguridad del Estado. Se reunió asimismo con dirigentes del Partido Democrático Popular del Afganistán (PDPA) y del Frente Nacional, así como con el Presidente del Tribunal Revolucionario y el Procurador General de la Nación. Mantuvo contactos con dirigentes sindicales y religiosos; con miembros de la Comisión de Reconciliación Nacional, del Comité Nacional de la Mujer, de la Universidad de Kabul, del Partido Democrático de la Juventud, y con jefes tribales de las provincias fronterizas. Además, el Relator Especial visitó en Kabul varios establecimientos de detención, tales como la cárcel central de Pol-i-Charkhi y los centros de interrogatorio de Sadarat, Shashdarat y Darlawan. Durante sus visitas, el Relator Especial conversó libremente y sin testigos con algunos detenidos. Visitó además cinco hospitales: el Hospital Avicenna, el Hospital Jumhooriyat, el Hospital de la Media Luna Roja, el Hospital Wazir Akbar Khan y el Hospital de las fuerzas armadas. Por último, mantuvo conversaciones con muchas personas liberadas en 1987 como consecuencia de las amnistías proclamadas por el Gobierno del Afganistán.

/...

4. El Relator Especial visitó además el distrito de Bagrame (provincia de Kabul), así como Herat y Mazar-e-Sharif, en la provincia de Balkh, donde se reunió con dirigentes regionales y locales y con dirigentes de la Comisión de Reconciliación Nacional, líderes religiosos, refugiados repatriados y miembros de grupos de autodefensa.

5. Durante su visita, el Relator Especial contó con la plena cooperación de los dirigentes afganos, quienes desplegaron los mayores esfuerzos para que su programa se ajustara en todo sus detalles a los deseos que había expresado anteriormente, y pudiese así efectuar las visitas, mantener los contactos individuales y realizar las entrevistas que había proyectado, a la vez que recibir los documentos necesarios. El Relator Especial desea sin embargo destacar que por razones ajenas a su voluntad no pudo visitar Kandahar y Khost, con arreglo a lo previsto en su programa.

6. Por último, al no haber podido visitar las regiones no controladas por el Gobierno, el Relator Especial se vio obligado a analizar la situación en dichas regiones sobre la base de las informaciones presentadas en forma de comunicación escrita por particulares u organizaciones interesadas.

7. Con arreglo a lo dicho anteriormente, el Relator Especial se declara satisfecho de ver que el estudio de la situación de los derechos humanos en el Afganistán no constituye ya una injerencia en los asuntos internos de dicho país.

8. Fiel a la línea de conducta que ha seguido siempre en la materia y con el fin de recoger informaciones tan diversificadas como fuese posible, el Relator Especial viajó al Pakistán, donde permaneció del 8 al 17 de septiembre de 1987. En el curso de dicho viaje se entrevistó con personas nacidas en las 14 provincias siguientes: Baghlan, Balkh, Faryab, Ghazni, Helmand, Herat, Kabul, Kandahar, Lowgar, Nangarhar, Paktia, Parvan, Qonduz y Vardak. Visitó además tres campamentos de refugiados (Chaman, Airam Csah y Nasir Bach) y ocho hospitales instalados especialmente para atender a afganos heridos, ya fuese en los bombardeos de sus aldea o en el curso de su viaje hacia el Pakistán para refugiarse en dicho país (Hospital Quirúrgico de Práctica Al Yihad; Hospital Ansari; Hospital Al-Jidmat; Hospital Quirúrgico de la muy venerada Meca; Hospital Afgano Muyahidin de la Unión Islámica, en Jalazaí, cerca de Peshawar; Hospital Quirúrgico Afgano; Hospital Saudita Al-Salam, en Saranan, así como los dos hospitales del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en Quetta y Peshawar). Por último, en el contexto de sus visitas a los campamentos de refugiados, el Relator Especial visitó los puestos de primeros auxilios para las víctimas afganas a cargo del CICR y de la Media Luna Roja árabe saudita en Beluchistán, así como del CICR y la Media Luna Roja de Kuwait en la provincia de la frontera del noroeste. Al respecto, el Relator Especial se informó de la situación mediante comunicaciones de particulares y de organizaciones interesadas en la cuestión.

9. Por último, el Relator Especial pudo contar una vez más con la colaboración especialmente valiosa de las autoridades pakistaníes.

/...

10. A fin de elaborar el presente informe, además de las informaciones recogidas en sus dos visitas al Afganistán y al Pakistán, el Relator Especial analizó el curso de los acontecimientos en todo el período que se examina en el informe y estudió sistemáticamente las informaciones recibidas por escrito de particulares y de organizaciones interesadas en lo relativo a su mandato, especialmente las estadísticas que se conservan en la Fundación Bibliotheca Afghanica (Liestal, Suiza).

11. Consciente de la evolución de la situación en el Afganistán, el Relator Especial describe en el capítulo II infra los antecedentes políticos y la evolución de la situación de los derechos humanos en el país. En el capítulo III analiza la situación de los refugiados. En el capítulo IV evalúa la situación de los derechos humanos, por una parte con independencia del conflicto armado y por otra como consecuencia del conflicto armado en el Afganistán. Por último, en los capítulos V y VI presenta sus conclusiones y recomendaciones, basadas en su análisis de las informaciones disponibles y en el examen de las medidas que podrían adoptarse en el marco de su mandato.

II. ANTECEDENTES POLITICOS Y EVOLUCION DE LA SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL AFGANISTAN

12. Partiendo de la hipótesis de que la índole de un régimen político determina la manera en que se respetan los derechos humanos en un país, el Relator Especial analiza a continuación la estructura política, jurídica y constitucional del Afganistán. Se desprende de lo anterior que el Relator Especial, en el marco de su mandato, sigue haciendo todo lo posible para mantener informada a la Asamblea General en la forma más imparcial y objetiva, con el único fin de contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos en ese país y a favorecer la causa de los derechos humanos.

A. Política de reconciliación nacional

13. En el informe presentado a la Comisión de Derechos Humanos en su 43° período de sesiones (E/CN.4/1987/22) el Relator Especial, al describir la situación de la evolución de los derechos humanos en el Afganistán, hasta enero de 1987, mencionó los esfuerzos realizados para hallar una solución política al conflicto, ya que, en su opinión, sólo una solución política convenida podría mejorar la situación respecto de los derechos humanos. En este sentido, se refirió a la retirada parcial de tropas soviéticas efectuada entre el 15 de octubre de 1986 y fines del mismo año, al llamamiento en pro de la reconciliación nacional, a la declaración de cese del fuego por un período de seis meses a partir del 15 de enero de 1987 y al decreto de amnistía del 1° de enero de 1987.

14. El Gobierno hizo observar a la sazón que las medidas adoptadas eran la expresión de sus principios y de su política humanista cuyo objetivo era asegurar la realización plena y sistemática de los derechos humanos mediante la mayor participación posible del pueblo en las esferas política, económica, social y cultural de la vida nacional.

/...

15. En este sentido, el Relator Especial recibió de las autoridades afganas informaciones relativas a las medidas adoptadas que complementaban las declaraciones que ya figuraban en su último informe (E/CN.4/1987/22, párrs. 23 a 38). A continuación se ofrece una breve descripción de los principales decretos:

a) El decreto No. 56 de fecha 5 de mayo de 1987 dispone en su artículo primero que los ciudadanos afganos que regresen al Afganistán en el marco del proceso de reconciliación nacional y cuyo regreso esté certificado por "la oficina de asuntos de personas que regresan al país" serán exonerados del pago del saldo del impuesto de vivienda, del impuesto municipal, de las tarifas de electricidad, agua, teléfono, etc. Esto significa que no se le reclamará el monto acumulado durante el período transcurrido entre la fecha de emigración y la fecha de regreso. El artículo 2 prevé la exoneración de intereses bancarios sobre préstamos que abarquen el período comprendido entre la fecha de emigración y la de regreso. El artículo 3 prevé la exoneración del pago de las deudas bancarias durante un período de un año a partir de la fecha de regreso de los repatriados, pudiéndose prorrogar este período seis meses con la anuencia del banco interesado. Los artículos 4 y 5 prevén el pago de impuestos por las instituciones, organizaciones o personas que utilicen la propiedad de una persona que haya emigrado hasta la fecha en que la propiedad se devuelva al propietario;

b) El decreto No. 322 de fecha 6 de marzo de 1987 prevé la exoneración del impuesto territorial y de impuestos sobre tiendas, comercios personales, empresas y el alquiler de almacenes gubernamentales, así como la anulación de multas por no pagar dichos impuestos, en el caso de las personas que regresen al país en el marco del proceso de reconciliación nacional;

c) El decreto No. 80 de 23 de abril de 1987 prevé la reintegración a los puestos que ocupaban anteriormente, así como el pago de pensiones atrasadas, de todas las personas que hayan sido condenadas por delitos cometidos contra la seguridad interior o exterior y que hayan sido puestas en libertad después de los decretos de amnistía o que hayan cumplido su condena, así como todos los que formasen parte de grupos de opositores y hayan depuesto las armas y regresado al país. El decreto se aplica igualmente a los funcionarios y a los trabajadores que hayan abandonado sus funciones;

d) El decreto No. 307 de 26 de abril de 1987 se refiere a la liberación de las personas que hayan pertenecido a las fuerzas armadas y a las que estuviesen aptas para el servicio militar, tras la revocación de la sentencia. El artículo 1 del decreto enumera las categorías de personas que se pueden beneficiar de la revocación de la sentencia y de su integración a las fuerzas armadas:

- i) Las personas que hayan sido condenadas a penas de prisión de hasta 12 años conforme a los artículos 105 y 115 del Código de Procedimiento Penal Militar, el artículo 8 de la ley sobre delitos de desertión en tiempos de guerra y el artículo 17 del Código Penal Militar, y que hayan cumplido la tercera parte de la condena o más;
- ii) Las personas que hayan sido condenadas a 15 años de prisión o más en virtud de los artículos 175 y 34 del Código Penal y que hayan cumplido la cuarta parte o más de esta condena;

- iii) Las personas que hayan sido condenadas a penas que comporten hasta 12 años de reclusión y que hayan cumplido la cuarta parte de la condena o más;
- iv) Las personas que hayan sido condenadas en virtud de los artículos 29, 30, 49 y 50 del Código Penal y todas las que hayan sido condenadas a penas de reclusión de hasta siete años y que hayan cumplido dos años o más de la condena.

Sin embargo, los párrafos 1 a 5 del artículo 2 contienen una limitación muy importante, ya que las disposiciones del decreto no se aplican a reincidentes ni a las siguientes categorías de delincuentes: las personas condenadas por terrorismo, espionaje, conspiración para tomar el poder (párr. 1); las personas condenadas en virtud de los párrafos 4 y 5 del artículo 8 de la ley sobre delitos de desertión y delitos análogos que se tratan en el artículo 17 del Código Penal Militar (párr. 2); las personas condenadas en virtud del artículo 175 del Código Penal a las que no se aplica el párrafo 2 del artículo 1 del presente decreto (párr. 3); las personas condenadas en virtud de los artículos 176, 178 y 179 del párrafo 1 del artículo 192 y de los artículos 205, 206 y 217 del Código Penal (párr. 4) y, por último, las personas condenadas en virtud de los artículos 395, 396, 449, 455, párrafos 2, 3 y 4, y de los artículos 268, 270, 360 a 366 del Código Penal;

e) El decreto No. 321 de 5 de mayo de 1986, que se refiere a la restitución de bienes a los repatriados, prevé una serie de disposiciones que permiten a las personas que regresan al país recuperar sus bienes muebles e inmuebles, fondos, divisas y acciones que tengan en los bancos o en las empresas y que, por haberse ausentado el propietario, hayan sido nacionalizados, incautados por el Estado o apropiados en forma ilegal. Además, el artículo 17 estipula que si el propietario de los bienes fallece, sus herederos, si se encuentran en el país o regresan al país, o si se prueba su derecho a la herencia, serán reconocidos como propietarios de dichos bienes. El artículo 18 prevé que si el propietario de los bienes o uno de los miembros de su familia regresa al país en los cinco años siguientes a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, se le pagará la parte que le corresponda de los bienes confiscados;

f) El decreto No. 88 de fecha 25 de mayo de 1987 contiene nuevas disposiciones reglamentarias sobre la distribución de tierras en beneficio de los campesinos sin tierra, sobre los principios de ejecución, sobre el derecho de los campesinos sin tierra y de los trabajadores agrícolas a la propiedad y sobre el derecho a la utilización de las aguas y a su distribución equitativa conforme a las costumbres locales y en relación con la superficie cultivada.

16. Mientras el Relator Especial efectuaba su visita al Afganistán, se decretó una amnistía en ocasión de la fecha del sacrificio (Eid-el-Ghorban) a favor de todos los condenados que tuvieran 60 años de edad, que sólo les faltare un año por cumplir, y todos los que padecieran una enfermedad incurable, según certificación de una comisión médica competente.

/...

17. El llamamiento a la reconciliación nacional hecho por el Gobierno constituyó el principal acontecimiento político de política exterior o interior en el Afganistán. La evaluación de la política de reconciliación nacional difiere ampliamente entre las distintas partes afectadas. El Relator Especial ya ha tenido ocasión de mencionar que, en lo que respecta a los derechos humanos, debe analizarse esa política a la luz del goce efectivo y verdadero de los derechos humanos por parte de todos los ciudadanos del país dondequiera que vivan, antes y durante la retirada total de las tropas soviéticas del país.

18. En este contexto, cabe recordar que el Afganistán y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas concertaron un Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación el 5 de diciembre de 1987. El artículo 5 del Tratado dice:

"Las Altas Partes Contratantes, actuando en el espíritu de las tradiciones de amistad y buena vecindad, así como de la Carta de las Naciones Unidas, se consultarán entre sí y, de común acuerdo, adoptarán medidas adecuadas para garantizar la seguridad, la independencia y la integridad territorial de los dos países. Con el fin de fortalecer su capacidad de defensa, las Altas Partes Contratantes seguirán desarrollando la cooperación en la esfera militar sobre la base de los acuerdos pertinentes que hayan concertado."

19. Sin embargo, para el Relator Especial se hace evidente que el "pequeño contingente de fuerzas soviéticas", por un lado, y la existencia de millones de refugiados afganos fuera de su país, por el otro, se relacionan entre sí y afectan directamente el problema de la libre determinación del pueblo afgano. Este es un problema fundamental de derechos humanos, ya que el derecho a la libre determinación se reconoce como un derecho humano fundamental. En el párrafo 1 del artículo 1 de los pactos internacionales de derechos humanos (véase la resolución 2200 (XXI), anexo, de la Asamblea General) en que son partes tanto el Afganistán como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se establece lo siguiente:

"Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo su desarrollo económico, social y cultural."

20. En este sentido, respondiendo a la pregunta planteada por el Relator Especial en relación con el principio de autodeterminación y la presencia del contingente limitado en el país, un miembro del Comité Central del Partido Democrático Popular del Afganistán declaró que en virtud del párrafo 2 del artículo 1 del proyecto de constitución, la posición de país no alineado del Afganistán se encuentra consagrada en este instrumento, aunque esta política ya forme parte de la tradición del Afganistán y no tenga nada de contradictorio con la presencia de un contingente limitado. Señaló además que las autoridades soviéticas habían decidido enviar este contingente por invitación del Gobierno afgano lo que, por lo demás, concordaba con el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

/...

B. Análisis del proyecto de constitución

21. Se informó al Relator Especial acerca del proyecto de constitución del Afganistán, que tuvo varias ocasiones de examinar durante el transcurso de su visita al Afganistán y al Pakistán. También se le informó acerca del procedimiento previsto para la aprobación del proyecto de constitución. El proyecto de constitución se conoce menos en el exterior, en particular entre los refugiados y las organizaciones políticas afganas en el Pakistán. Los que conocen el texto del proyecto de constitución lo rechazan porque consideran que constituye una forma de legitimizar un régimen que jamás se ha instalado en la forma democrática tradicional. La cuestión de la legitimidad del "poder constituyente" en la situación actual del Afganistán constituye realmente un problema jurídico y político importante que no se puede examinar en este informe.

22. Sin entrar a examinar este problema, cuya dimensión es innegable, el Relator Especial desea formular observaciones sobre el texto de un nuevo proyecto de constitución en la medida en que concierne a los problemas de derechos humanos o a problemas vinculados con los derechos humanos. El Relator Especial ya presentó un informe sobre los Principios Fundamentales de la República Democrática del Afganistán que siguen en vigencia. El texto del proyecto de constitución debe examinarse a la luz de estos principios fundamentales y los decretos de reforma emitidos a partir de abril de 1978. En el artículo 136 del proyecto se establece que, al promulgarse la nueva Constitución, se abrogarán los Principios Fundamentales. En consecuencia, la nueva Constitución sería el único texto constitucional válido. Sin embargo, el artículo 137 es muy amplio y deja abierto a la interpretación qué leyes y demás documentos legislativos existentes antes de la entrada en vigor de la nueva constitución seguirán vigentes.

23. En el artículo 1 se describe expresamente la República como "país no alineado que no se asocia a ningún bloque militar y no permite el establecimiento de bases militares extranjeras en sus territorios". La aplicación de este artículo creará una situación contradictoria si las fuerzas soviéticas se encuentran aún presentes en el Afganistán cuando entre en vigor la nueva Constitución, aun si se toma en cuenta el artículo 4 del Tratado de amistad con la Unión Soviética.

24. En el artículo 2 se proclama la sagrada religión del Islam como religión del Afganistán. Esto representa un cambio evidente respecto de los Principios Fundamentales.

25. En el artículo 4 se permite la formación de partidos políticos y se establece que "un partido constituido de conformidad las disposiciones de la leyes sólo puede disolverse por motivos legales". También se estipula que "el Partido Democrático Popular del Afganistán (PDPA) es organizador y guardián de la ejecución de la política y las funciones de reconciliación nacional de conformidad con la Constitución y las leyes de la República Democrática del Afganistán. El Partido Democrático Popular del Afganistán luchará por la justicia y el progreso social". Esta disposición da al PDPA una garantía constitucional y, en consecuencia, crea una diferencia importante entre los partidos políticos. Por otro lado, en el artículo 5 se crea el Frente Nacional que debe coordinar y "unir los partidos políticos". La experiencia de los frentes nacionales en otros Estados ha demostrado que pueden poner en peligro la libertad de formar partidos políticos.

/.

26. El capítulo III del proyecto de constitución se titula "Ciudadanía, derechos, libertades fundamentales y deberes de los ciudadanos" y abarca los artículos 33 a 65 en que se consagran derechos civiles y políticos, así como derechos económicos, sociales y culturales. Este capítulo se caracteriza por constantes referencias a "la ley" con respecto a los derechos más importantes, lo que de hecho podría restringir o en otra forma circunscribir dichos derechos. Sólo cuando en el proyecto de constitución se prevén la infraestructura y los mecanismos necesarios, por ejemplo para que los ciudadanos ejerzan sus derechos y libertades fundamentales, puede decirse que se garantizan los derechos proclamados. En el artículo 64 sólo se hace una referencia muy vaga a este respecto.

27. El proyecto de constitución contiene una disposición que prohíbe "la tortura y el vejamen" en el artículo 42, en que también se sanciona a "todo funcionario público que torture al acusado ...". Además, en la disposición se establece que "no se podrá alegar el cumplimiento de órdenes superiores como motivo de exoneración ...".

28. El capítulo IV del proyecto de constitución se refiere a la Loya Jirgah. En el artículo 66 se estipula la composición de la Loya Jirgah y, si bien se omite toda referencia a los miembros de los partidos políticos, sí se incluye a los miembros de la Junta Ejecutiva del Frente Nacional. En consecuencia, se debe considerar que el artículo 66 tiene carácter indicativo o provisional, ya que la Loya Jirgah, por su propio índole, debe tener una representación universal del pueblo afgano. En consecuencia, debe suponerse que la representación de los cinco millones de refugiados que viven fuera del país se tomará en cuenta, de lo contrario la Loya Jirgah establecida en el capítulo IV del proyecto de constitución se verá limitada a la incompleta estructura de poder que tiene actualmente.

29. El capítulo X del proyecto de constitución se refiere al poder judicial. El problema de las libertades personales y especialmente la de los llamados prisioneros políticos está vinculado con la institución de los tribunales revolucionarios y el fiscal revolucionario. En el artículo 117 del proyecto de constitución se perpetúa su existencia al prever el establecimiento de tribunales especiales, como lo hace el artículo 126, en que se establece "una oficina del fiscal especial" y el artículo 130, en que se prevé la regulación de "la estructura, composición, autoridad y método de actividad de los letrados".

III. SITUACION DE LOS REFUGIADOS

30. El Relator Especial, en el informe que presentó a la Comisión de Derechos Humanos en su 43° período de sesiones (E/CN.4/1987/22), estimó que había aproximadamente 5 millones de refugiados afganos. Al 1° de enero de 1987, según informaciones suministradas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (OACNUR), había 2.878.000 refugiados en el Pakistán. Además, según estimaciones oficiales, la OACNUR estimaba en 2,2 millones el número de refugiados en la República Islámica del Irán, país que el Relator Especial no había podido aún visitar (véase A/AC.96/693, parte V). En agosto de 1987, según estimaciones oficiales, había 3.156.569 refugiados inscritos repartidos en la provincia de la Frontera del Noroeste, Beluchistán, Punjab y Sind. Aparentemente, unas 300.000 personas esperaban aún que se las inscribiera en los campamentos de la provincia de Beluchistán y de la Frontera del Noroeste.

31. La visita realizada a los campamentos de refugiados en el Pakistán permite al Relator Especial suponer que, en todo caso, el número de refugiados no ha disminuido, si bien ha podido constatar una detención del movimiento de refugiados en la provincia de la Frontera del Noroeste, en particular en Bajaur, Kurram, Miram Shah y Wana, donde, según se informa, ha imperado un estado de calma desde marzo de 1987, al parecer debido a la instalación de puestos militares en esa parte de la frontera afgana. Los representantes de los puestos de primeros auxilios del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de la Media Luna Roja de Kuwait en favor de las víctimas afganas han confirmado también esa información y han declarado que han atendido a pocos heridos en los últimos cuatro meses.

32. En cuanto a las informaciones de que, aparentemente, hay refugiados que han regresado al Afganistán, el Relator Especial ha podido comprobar, en efecto, ese regreso; según estimaciones oficiales, 82.000 personas habrían regresado al Afganistán. Al respecto, el Primer Secretario del Comité Afgano para los Repatriados informó al Relator Especial de la creación en 1986 de un Ministerio para los Repatriados, encargado de facilitar el retorno de los refugiados y garantizarles condiciones de vida y de trabajo favorables a su regreso. Se han creado centros de acogida, llamados "centros de paz", que se han instalado en todas las ciudades y aldeas de la frontera (habría unas 18 aldeas con esas características) y se han establecido complejos hoteleros para ofrecer un primer alojamiento a los repatriados. Además, como se ha indicado anteriormente, el Gobierno ha adoptado medidas para que se restituyan a los refugiados los bienes que poseían antes de dejar el país. En general, los repatriados se van a reasentar en su región de origen una vez terminados el proceso de inscripción y la expedición de documentos de identidad y una vez resuelto cualquier otro problema administrativo. Además, habrá un período de gracia de seis meses para los repatriados en edad de hacer el servicio militar y quienes anteriormente estaban encuadrados en el ejército volverán a tener el mismo grado que antes de su partida. Por último, en el decreto de amnistía de enero de 1987 figuran disposiciones por las que se garantiza la protección de los repatriados de toda eventual acción jurídica contra ellos por haber abandonado el país.

33. El Relator Especial, durante su visita al Afganistán, tuvo oportunidad de visitar centros de acogida de los repatriados y de entrevistarse con muchos de ellos en Kabul y Herat. Los repatriados regresaban sobre todo del Pakistán, la República Islámica del Irán, la India, los Estados Unidos de América, la República Federal de Alemania, Francia, Austria, el Japón, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Turquía. Sin embargo, al parecer, en su mayor parte se trataba de refugiados no inscritos. Aparentemente, tres elementos dieron lugar a su decisión de regresar al país: ante todo las dificultades de todo refugiado, en segundo lugar la oposición de las autoridades de la República Islámica del Irán o de los dirigentes políticos o tribales del Pakistán a que retornaran a su país, lo que pudo haber acentuado su determinación de regresar, y por último el llamamiento formulado por las autoridades del Afganistán al establecer el proceso de reconciliación nacional.

34. En el Afganistán, varios dirigentes han manifestado su oposición al regreso de los refugiados al país. Al parecer, esa oposición emana de las propias autoridades, en relación con los refugiados en la República Islámica del Irán y

/...

con algunos dirigentes políticos de la resistencia o jefes de tribu refugiados en el Pakistán. Al respecto, la opinión más generalmente expresada era que los refugiados en la República Islámica del Irán y el Pakistán constituían un medio de presión y se los utilizaría con fines estrictamente políticos.

35. Particularmente en relación con esas alegaciones, el Relator Especial, durante su visita al Pakistán, ha reunido muchas informaciones de las autoridades oficiales y de varios refugiados en el Pakistán*, que ponen en entredicho la base de tales alegaciones, al menos por las siguientes tres razones:

a) En los campamentos de refugiados está garantizada la libertad de movimiento y, en consecuencia, si los refugiados decidieran abandonar esos campamentos, no existiría aparentemente ninguna medida de seguridad particular que se lo impidiera;

b) Las autoridades del Pakistán, al reconocer el continuo deterioro de las condiciones de vida de los refugiados, no podían en ningún caso impedirles partir, sometiéndoles a unas condiciones de vida cada vez más precarias. Al respecto, se ha precisado que el Gobierno del Pakistán no realizaba ningún acto de propaganda por el que incitara a los refugiados a instalarse en el Pakistán, ni les impedía salir de ese país, ya que su política ha consistido siempre en permitir el libre desplazamiento de todos los refugiados;

c) El Relator Especial, en su visita a regiones muy cercanas a la frontera afgana, ha podido comprobar por sí mismo que existe una tal fluidez en las fronteras entre el Pakistán y el Afganistán que sería difícil plantear siquiera la posibilidad de retener a los refugiados en caso de que verdaderamente quisieran partir.

36. El Relator Especial, preocupado por verificar sistemáticamente toda alegación de cualquier fuente, estima, por lo menos en relación con un incidente en que hubo oposición a que los refugiados partieran, que las acusaciones no están suficientemente justificadas. Se trataba de un incidente en el que, aparentemente, se impidió a unas 2.080 familias abandonar los campamentos de refugiados, entre ellos el de Nasir Bakh, y se transfirió a las familias a campamentos desconocidos.

37. Según informaciones transmitidas al Relator Especial, el Gobierno del Pakistán había cumplido su compromiso de ofrecer asilo a los nacionales del Afganistán en espera de que regresaran a su país, pero recientemente ha adoptado medidas para desplazar a los refugiados afganos de las ciudades hacia los campamentos de refugiados, en la zona de asentamiento de Mianwali en Punjab. Las autoridades oficiales declararon que se trataba de una política destinada a proteger a los refugiados de acusaciones que podían involucrarlos en disturbios y atentados cometidos en territorio pakistaní. Al respecto, se han mencionado varios atentados con bombas, principalmente en Lahore, Karachi, Islamabad, Rawalpindi y Peshawar,

* El Relator Especial, al no poder visitar la República Islámica del Irán, no ha podido verificar las acusaciones relativas a los refugiados en ese país.

frecuentemente en bazares frecuentados por una población civil especialmente numerosa. Por ello, resultaba urgente y necesario adoptar medidas para controlar mejor los desplazamientos de los refugiados afganos, ya que ciertos supuestos refugiados eran en realidad agentes provocadores.

IV. EVALUACION DE LA SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL AFGANISTAN

A. Situación de los derechos humanos independientemente del conflicto armado

38. El Relator Especial, en sus informes anteriores, examinó, por un lado, la situación de los derechos humanos en relación con el conflicto armado y, por otro lado, la situación de los derechos humanos en el país independientemente del conflicto armado. Ese enfoque todavía es válido. Sin embargo, como indicó el Relator Especial en su informe más reciente a la Comisión de Derechos Humanos (E/CN.4/1987/22), debe examinarse debidamente el proceso de reconciliación anunciado por el Gobierno en enero de 1987. En el párrafo 55 de ese informe, el Relator Especial recomendó lo siguiente:

"La Comisión de Derechos Humanos debe seguir observando cuidadosamente los efectos que sobre la situación de los derechos humanos tienen los acontecimientos políticos más recientes del Afganistán, en particular el cese del fuego anunciado y la amnistía proclamada. Esta observación debería tener como objetivo principal lo siguiente:

- a) Determinar si han cesado los bombardeos;
- b) Si ha habido una reducción importante de las bajas entre los civiles;
- c) Si se ha puesto fin a las brutalidades como consecuencia de las acciones de guerra;
- d) Si un número considerable de refugiados ha comenzado a regresar a su país;
- e) Si ha mejorado la situación económica, social y cultural de la población de regiones no controladas por el Gobierno;
- f) Si se ha puesto fin al uso de la tortura durante los interrogatorios y si han mejorado las condiciones en las prisiones."

39. El Relator Especial, desde que visitó el Afganistán, es consciente de que debe examinarse la situación de los derechos humanos prestando la debida atención al hecho de que en el país hay tres categorías diferentes de regiones, a saber, las que están bajo control del Gobierno, las que no están bajo control del Gobierno y están total o parcialmente controladas por los movimientos de oposición, y las regiones donde se libran combates y la situación de los derechos humanos depende de la gravedad del conflicto. La situación de los derechos humanos en esta última categoría de regiones es tan compleja que apenas si es posible aplicar normas de la esfera de los derechos humanos y deben aplicarse normas de derecho internacional.

1. En las regiones controladas por el Gobierno

40. El Relator Especial pudo visitar, entre las regiones controladas por el Gobierno, partes de la región de Herat y Balkh, incluida la capital provincial Masar-i-Sharif. En esas regiones, visitó prisiones y lugares de detención, así como hospitales, escuelas e institutos de enseñanza, y se reunió en aldeas y provincias con representantes de todos los grupos de la sociedad afgana.

41. Durante esas visitas y reuniones, el Relator Especial se centró en particular en la situación del derecho a la vida, el derecho a la libertad y la seguridad de las personas, las condiciones de detención, el problema de la tortura, las repercusiones de las ideologías en conflicto sobre la vida cultural, los derechos económicos y sociales, otros derechos civiles y políticos y el derecho a la libre determinación. Al respecto, el Relator Especial pudo comparar en cierto grado sus resultados de informes anteriores con la realidad actual. En particular, tuvo mucha expectativa por ver si, debido a la nueva política anunciada, se había modificado la situación de los derechos humanos.

a) El derecho a la vida

42. El Gobierno no comunicó ninguna estadística sobre el número de sentencias de muerte pronunciadas o ejecutadas en 1987. Sin embargo, un representante de la prisión de Pol-i-Charkhi informó al Relator Especial que se había ejecutado al Sr. Sahib Sahrayi, antiguo Ministro de Asuntos Culturales.

43. Los representantes del Gobierno afirmaron que podía apelarse de una sentencia de muerte ante el Consejo Revolucionario, si bien, al parecer, no muchas personas presentaban una apelación de esa índole. El Relator Especial no pudo determinar si se había perdonado la vida de algún sentenciado a muerte. Algunos antiguos prisioneros que habían estado detenidos en Pol-i-Charkhi declararon que no se ejecutaba a quienes se había comunicado la sentencia por escrito - y el Relator Especial vio varias sentencias extendidas por escrito -; sin embargo, los prisioneros detenidos en Pol-i-Charkhi, cuya sentencia no figuraba por escrito, corrían el riesgo de que se les ejecutara. Las autoridades gubernamentales afirmaron que cuando se sentenciaba a muerte a una persona, la sentencia se ejecutaba con rapidez.

44. El Relator Especial ha recibido también información - que no puede verificar - sobre las supuestas ejecuciones en Pol-i-Charkhi de algunos detenidos de las prisiones en otras regiones, como Jalalabad, mediante métodos particularmente inhumanos.

b) Derecho a la libertad y la seguridad personales

45. Por primera vez el Relator Especial tuvo acceso a la legislación sobre esta materia. Al respecto, es interesante la situación jurídica de los "prisioneros políticos", grupo que se divide en dos categorías: los que se encuentran bajo detención preventiva y los presos en virtud de una sentencia.

46. se puede mantener en custodia a los sospechosos de haber cometido delitos contra el Estado por un plazo máximo de 72 horas, después del cual deben comparecer

/...

ante la autoridad competente. Sin embargo, conforme a lo dispuesto en la ley de 1978, el Fiscal Revolucionario puede disponer que se mantenga a una persona bajo investigación especial por un máximo de cinco meses. Al parecer, se puede presentar un recurso de amparo contra una decisión de esa naturaleza, pero solamente por conducto del Consejo Revolucionario y ningún tribunal tiene competencia para pronunciarse con respecto a esa decisión. Cuando se presenta una apelación ante el Consejo Revolucionario, el Fiscal Revolucionario participa en las deliberaciones del Consejo sobre la solicitud de examen de su propia orden. El artículo 12 de la Ley de Investigación de Delitos dispone lo siguiente:

"1. Las autoridades encargadas de la investigación de delitos deben presentar un informe al Fiscal dentro de un plazo de 72 horas contadas a partir de la detención.

2. Durante las 72 horas posteriores a la recepción del informe, el Fiscal debe decidir si se deja en libertad al acusado o si se lo mantiene bajo custodia."

El artículo 15, que se refiere al período de detención, dispone lo siguiente:

"1. El Fiscal deberá decidir si se deja en libertad o se mantiene detenido al acusado después del término de la investigación.

2. El plazo máximo de detención de un acusado mientras se investiga un delito es de dos meses.

3. En caso de delitos complejos, los fiscales de las provincias, el Fiscal Especial de las Fuerzas Armadas y el Fiscal Especial pueden prorrogar el período de detención por un plazo de hasta seis meses.

4. En casos extraordinarios, corresponde al Procurador General de la República Democrática del Afganistán, al Fiscal Especial de las Fuerzas Armadas y al Fiscal Especial determinar si se prorroga el período de detención más allá de seis meses."

47. Mientras se realiza la investigación, el acusado queda detenido y se considera que su inocencia está en tela de juicio. Después de observar las condiciones en que se encuentran las personas sometidas a investigación en la cárcel de Sadarat, el Relator Especial tiene la convicción de que el preso puede correr cualquier suerte sin que nadie lo sepa. En el inciso c) se presenta información más detallada sobre las condiciones de detención.

48. Durante su visita, las autoridades entregaron al Relator Especial la siguiente información sobre el número de detenidos:

a) Kabul:

i) Pol-i-Charkhi: 5.335 presos que se dividían en 4.926 prisioneros políticos, 384 de derecho común y 25 mujeres (5 prisioneras políticas y 20 de derecho común);

ii) Shashdarat: ningún detenido;

/...

iii) Sadarat: 86 detenidos, 36 de ellos sometidos a juicio y 50 bajo investigación;

b) Herat:

i) Prisión: 335 presos que se dividían en 247 prisioneros políticos y 88 de derecho común;

ii) Centro de detención: 35 personas sometidas a interrogatorios;

c) Mazar-e-Sharif:

No se dispone de información.

49. En virtud de una ley especial, se crearon tribunales revolucionarios. De acuerdo con el artículo 7 de la ley, el Tribunal Revolucionario Especial está integrado por un Presidente, un Vicepresidente y varios miembros designados por el Presidium del Consejo Revolucionario de la República Democrática del Afganistán. En los artículos 10 a 13 se describen sus funciones y su competencia, que son de carácter muy amplio. Por lo tanto, el Tribunal Revolucionario Especial tiene autoridad para considerar casos relacionados con delitos contra la seguridad anterior e interior del país; contra la integridad territorial, la soberanía y la independencia nacional, y contra el Estado y las obras de la Revolución de Abril, así como delitos cometidos por funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional. Los fallos del Tribunal Revolucionario Especial tienen carácter definitivo. No se puede someter a juicio, detener o poner en libertad al Presidente y los miembros del Tribunal Revolucionario Especial sin la autorización del Presidium del Consejo Revolucionario de la República Democrática del Afganistán.

50. Como se indicó anteriormente, con respecto a la administración de justicia en general el Relator Especial recibió la confirmación de que corresponde al Tribunal Revolucionario conocer los delitos cometidos contra la seguridad interior o exterior del país. Solamente el Procurador General puede autorizar la detención preventiva más allá del período de detención de 72 horas. El Procurador General Adjunto informó al Relator Especial que en el caso de detención preventiva superior a 72 horas el inculpado tiene el derecho de apelar ante el Consejo Revolucionario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de los Principios Fundamentales. De acuerdo con las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, el proceso de investigación se puede prolongar por un máximo de seis meses por orden del Procurador General. Conforme a lo estipulado en los artículos 106, 107, 116 y 117 de dicho Código, el acusado tiene derecho a presentar una denuncia a los oficiales de prisiones, al Procurador General o al Tribunal en relación con cualquier aspecto de su detención que se considere ilegal, desde su arresto hasta que comparece ante el Tribunal. Según el artículo 243 del Código Penal, el acusado tiene derecho a recibir asistencia de uno o más letrados durante el juicio. Se prohíbe formalmente obligar al acusado a responder todas las preguntas durante el juicio y presionarlo para que haga declaraciones contra su voluntad.

51. De acuerdo con la información proporcionada al Relator Especial en el Pakistán por presos excarcelados poco tiempo antes, no se les entregó ningún documento en que constara su excarcelación; dicha práctica es contraria a lo dispuesto en el

/...

artículo 67 de la ley de 1983 sobre la aplicación de la pena de prisión, que estipula lo siguiente: "el mismo día en que se deje en libertad a una persona hay que entregarle sus documentos y efectos personales ..., así como un certificado en el que quede constancia de su excarcelación". Además, no se había ofrecido ninguna posibilidad de apelación a las personas interrogadas por el Relator Especial que declararon haber estado sometidas a prisión preventiva durante más de seis meses y, en algunos casos, hasta diez meses. Por otra parte, los presos excarcelados que estaban en edad de hacer el servicio militar fueron alistados de inmediato en el ejército; en algunos casos ni siquiera se les permitió visitar a sus familias.

52. No hay prisioneros políticos en todas las provincias; por ejemplo, en la cárcel de Mazar-i-Sharif hay prisioneros de cinco provincias. La cárcel más importante es la de Pol-i-Charkhi, donde el Relator Especial pudo recorrer algunos de los pabellones y conversar con los presos. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) hizo un recorrido minucioso de Pol-i-Charkhi y se puede considerar que sus conclusiones son totalmente fidedignas.

53. Cuando el Relator Especial estuvo en Pol-i-Charkhi, el Director de la prisión le informó que había 5.335 presos, pero también escuchó decir que el número de presos era mayor y, hasta hace pocos años, la población de la cárcel era de aproximadamente unas 50.000 personas. El Relator Especial considera que la situación actual es diferente.

54. Después de que el Relator Especial visitó la cárcel, varios testigos le informaron que los malos tratos eran muy comunes. Aunque el Relator Especial hizo preguntas concretas a las autoridades carcelarias con respecto a las medidas de disciplina utilizadas, se negó que se recurriera a cualquier forma de castigo corporal. Sin embargo, algunos ex presos que hicieron declaraciones fuera del Afganistán indicaron que, incluso después de que se anunció el comienzo del proceso de reconciliación, los presos habían recibido golpes con varas, puntapiés y tratos humillantes. Las acusaciones fueron tan verosímiles y los lugares donde se sometió a los presos a malos tratos fueron identificados con tanta claridad que el Relator Especial considera factible aceptar que los presos reciben ese tipo de trato. Por otra parte, se informó al Relator Especial que las condiciones carcelarias habían mejorado levemente, por ejemplo con respecto a la frecuencia de las visitas de familiares.

55. Uno de los efectos de la nueva política fue la excarcelación de presos antes de que cumplieran su sentencia. Las autoridades informaron al Relator Especial que, en virtud del decreto de amnistía del 25 de enero de 1987, se dejó en libertad a 7.000 presos. Cuando el Relator Especial visitó Pol-i-Charkhi, se dejó en libertad a 51 presos y, según se informó, otros 150 iban a quedar en libertad el mismo día.

56. El Relator Especial visitó en sus hogares a ex presos que habían quedado en libertad poco antes. También habló con ex presos que habían salido del país. Apparently, hay diferentes categorías de presos excarcelados: los que todavía están en edad de hacer el servicio militar y que, como informó el Gobierno al Relator Especial, tienen la obligación de ingresar al ejército seis meses después de quedar en libertad; los sometidos a control después de salir de la cárcel y los

/...

que quedan en libertad incondicional. El Relator Especial habló con personas que se encontraban en las tres categorías; algunos testigos le informaron que, en efecto, a los ex presos que están en edad de hacer el servicio militar se los lleva directamente de Pol-i-Charkhi al centro de detención de Sadarat y de allí a sus respectivas unidades militares. Hay muchos casos de personas de esa categoría que, después de estar en el ejército durante cierto tiempo, desertan y se refugian en otro país.

57. Una característica común a todos los presos que quedan en libertad es que a ninguno se le entrega un certificado de excarcelación en virtud de la amnistía, aunque tienen en su poder el veredicto que sirvió de base a su encarcelamiento.

c) Condiciones carcelarias

58. Según las declaraciones de representantes del Gobierno afgano, se creó una comisión independiente integrada por magistrados designados por el Procurador General para que controle las condiciones carcelarias. Después de cada inspección de control, se presenta un informe al Ministerio del Interior que lo transmite a la dirección de la cárcel para que se adopten las medidas pertinentes. En lo que respecta a las acusaciones de malos tratos a los presos, se declaró que, si bien están prohibidos por la ley, efectivamente se había señalado a la atención del Ministerio del Interior algunos casos de malos tratos.

59. Aunque el CICR hizo una inspección minuciosa de Pol-i-Charkhi, aún no ha tenido la oportunidad de hacer inspecciones en otras cárceles o centros de detención del Afganistán. El Relator Especial visitó los centros de detención de Sadarat, Shashdarat, Pol-o-Charkhi, Herat y Mazar-i-Sharif. A efectos de evaluación de las condiciones imperantes, tuvo en cuenta las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.

60. El Relator Especial no puede prejuzgar las conclusiones del CICR, que se guía por sus propias normas y criterios en las visitas a la cárceles. Sin embargo, observó que los presos sometidos a investigación están en celdas oscuras. Por ejemplo, en Sadarat había de una a cuatro personas por celda; éstas tenían ventanas pero estaban pintadas para no dejar entrar la luz. Las celdas utilizadas para interrogatorios estaban a cierta distancia de las demás. Se observó que en Shashdarat había celdas subterráneas, pero no se vio ninguna en Sadarat, aunque algunos ex presos entrevistados por el Relator Especial fuera del Afganistán le indicaron que en esa cárcel había celdas subterráneas. En todas las cárceles visitadas las condiciones de higiene eran deficientes. Por ejemplo, en Pol-i-Charkhi había cuatro lugares para lavarse y cuatro retretes por celda; generalmente había de 80 a 140 reclusos en cada una, pero se informó al Relator Especial que en una época llegó a haber 400 personas en una sola celda. También se indicó que la asignación media del Gobierno para alimentación era diferente en el caso de los prisioneros que cumplían una condena y los que estaban sometidos a investigación. Los últimos recibían suficiente comida, lo que no ocurría en el caso de los presos que estaban cumpliendo una condena. Varios ex presos dijeron que no hubieran podido sobrevivir si no hubieran sido por la comida que les llevaban sus parientes. En las cantinas de las cárceles no se vendían alimentos nutritivos. Algunos ex presos dijeron que algunos casos los guardias les robaban los paquetes con alimentos que les llevaban sus familiares, pero las

/...

autoridades de las prisiones negaron que eso hubiera sucedido. También se informó que los presos que pertenecían al PDPA recibían un trato privilegiado. Al parecer, se mantenía a menores y a adultos en una misma celda y sólo se los separaba cuando alguna organización internacional hacía una visita. Los patios de las cárceles no parecían adecuados para satisfacer las necesidades de recreo de los detenidos, dado que en la mayoría de los lugares apenas tenían sombra y estaban cubiertos de polvo. Pese a que las autoridades de las cárceles indicaron que los presos tenían derecho a recibir y estudiar las normas carcelarias, el Relator Especial no tuvo contacto con ningún preso o ex preso que hubiera podido hacerlo. Aunque las autoridades carcelarias negaron categóricamente que se recurriera al castigo corporal como medida disciplinaria, algunos ex presos afirmaron en forma convincente que en Pol-i-Charkhi el castigo corporal era una práctica diaria.

d) Tortura y malos tratos

61. En el párrafo 55 del último informe que presentó a la Comisión de Derechos Humanos (E/CN.4/1987/22), el Relator Especial recomendó que se debía seguir observando cuidadosamente los efectos que sobre la situación de los derechos humanos tenían los acontecimientos políticos más recientes del Afganistán, en particular si se había puesto fin al uso de la tortura durante los interrogatorios.

62. El Relator Especial recuerda el párrafo 1 del artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (véase el Anexo de la resolución 39/46 de la Asamblea General, de 10 de diciembre de 1984), que dice lo siguiente:

"A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término 'tortura' todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su conocimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas."

63. En informes anteriores, el Relator Especial se refirió a muchos casos de tortura de presos sometidos a investigación durante los interrogatorios. En el último informe de Amnesty International se hace referencia a muchos casos de tortura registrados en los últimos años del conflicto en el Afganistán y algunas organizaciones privadas también han mencionado casos de tortura. Durante su última visita al Pakistán, el Relator Especial supo que se había creado un Centro Siquiátrico para Afganos en Peshawar para atender a las víctimas de la tortura. El Relator Especial visitó el Centro, donde examinó los datos estadísticos y se informó sobre los métodos empleados. Asimismo, se reunió fuera del Afganistán con personas que afirmaban haber sido maltratadas o torturadas.

/...

64. Después de examinar minuciosamente las acusaciones de tortura que recibió, el Relator Especial opina que muchas de ellas no corresponden a la definición jurídica del término contenida en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Sin embargo, las condiciones carcelarias son tales que se pueden considerar como tortura psicológica; de ser así, ese tipo de trato puede estar contemplado en la definición. Además, el Relator Especial recibió información de un testigo muy fiable que vive en el Afganistán en el sentido de que no se habían notificado casos de tortura como los descritos en informes anteriores durante los últimos seis meses.

65. Por otra parte, representantes de las fuerzas armadas del Gobierno afirmaron que algunos prisioneros de guerra de los movimientos de oposición que habían logrado escapar informaron que se les había sometido a tortura y malos tratos.

66. De acuerdo con la información proporcionada últimamente al Relator Especial en el Pakistán por personas que estuvieron presas en Pol-i-Charkhi y que quedaron en libertad recientemente, en esa cárcel se seguía infligiendo malos tratos a los presos. Tres ex presos informaron que los guardias les habían pegado con varas por haberse quejado de las malas condiciones carcelarias. Además, según ellos fueron enviados a Sadarat antes de que se les informara que habían quedado en libertad e inmediatamente después los obligaron a hacer el servicio militar sin poder visitar a sus familias.

e) Derecho a la libertad de culto

67. El Relator Especial visitó varias mezquitas e instituciones religiosas en Kabul durante la festividad de Eid-el-Ghorban y, más adelante, en Mazar-i-Sharif, donde tuvo la oportunidad de conversar con varios sacerdotes. En sus visitas, y en general durante su estancia en el país, no encontró ninguna evidencia de restricción de la vida religiosa.

68. Portavoces del Consejo Superior de Expertos Religiosos y Clérigos del Afganistán informaron al Relator Especial que las autoridades estaban dando ayuda financiera para facilitar las peregrinaciones a la Meca y para un programa de reconstrucción de mezquitas averiadas o destruidas. No se pudo comprobar la veracidad de las acusaciones de que los movimientos de oposición habían destruido algunas mezquitas.

69. En las instituciones que visitó el Relator Especial no se otorgaba particular importancia a la religión.

70. En virtud del artículo 2 del proyecto de constitución, el islamismo es la religión del Afganistán. Representantes del Gobierno admitieron que poco después de la revolución saur se cometieron algunos errores que podrían haberse interpretado como actos contrarios a la sensibilidad religiosa; algunos mullahs confirmaron esa idea y añadieron que desde entonces la situación había mejorado.

f) Consecuencias de los conflictos ideológicos para la vida cultural del Afganistán, incluido el sistema universitario

71. Durante la visita del Relator Especial al Afganistán, las autoridades le informaron que la política del Gobierno no se basaba en una ideología bilateral o partidista, sino en consideraciones de carácter nacional. Sin embargo, el Relator Especial observó que no era eso lo que ocurría en ciertos casos. Un ejemplo de ello es el trato que reciben los hijos de miembros del partido, que se ven obligados a ingresar a organizaciones en las que reciben adoctrinamiento y adiestramiento contra el "enemigo" de la nación afgana (los movimientos de oposición) y los acusados de participar en una guerra no declarada contra las Potencias amigas, como pudo comprobar el Relator Especial durante su visita a la organización juvenil y a la institución conocida por el nombre de Perwarischgahi watan (guardería de la patria). El Relator Especial se refirió a la política educacional del instituto en el informe que presentó a la Comisión en 1986 (véase E/CN.4/1986/24, párr. 65). Durante la visita, se mostró al Relator Especial los trabajos que se estaban realizando para que los alumnos contaran con más comodidades, pero es evidente que el instituto, donde viven y estudian muchos huérfanos e hijos de miembros del partido, tiene una orientación ideológica definida.

72. El instituto, que fue creado en 1981, tiene a su cargo la educación de huérfanos de soldados afganos mártires y también de hijos de miembros de la resistencia. La enseñanza se imparte en pachto, en dari y, a partir del cuarto grado, en ruso y otros idiomas extranjeros. Además de la institución que funciona en Kabul hay instituciones similares en Qandahar, Herat, Laghman, Nangarhar, Paktia, Baghlan, Parvan, Qonduz, Samangan, Balkh, Jowzjan, Faryab, Farah y Helmand. Algunos estudiantes reciben becas que les permiten seguir estudiando en "países amigos". Es posible que se hayan concedido de 100 a 120 becas para estudiar durante tres o cuatro años en el extranjero, especialmente en países socialistas. En todo el territorio posiblemente haya 2.500 niños que estén a cargo de instituciones similares.

73. El Relator Especial conversó con miembros del Senado Académico de la Universidad de Kabul y analizó con ellos cuestiones relativas al funcionamiento y la administración de la Universidad. Según se informó la Universidad tiene 7.600 alumnos, en comparación con 6.000 en 1978. Se estableció un sistema en virtud del cual las personas que desempeñan una profesión pueden seguir cursos vespertinos de dos años y al final de ese período pueden entrar a la universidad sin dar examen de ingreso. Durante los últimos cuatro años se ha venido celebrando una conferencia científica de una semana de duración en la que participan profesores y estudiantes que analizan diversos temas técnicos. Los resúmenes de los debates se publican en cuatro idiomas (inglés, francés, ruso y alemán). Para ingresar a la universidad hay que saber uno de esos cuatro idiomas por lo menos. Además, los estudiantes están exentos del servicio militar hasta que terminan sus estudios universitarios. La designación de los profesores universitarios corresponde a las autoridades administrativas. En cuanto a la situación de los docentes que han estado presos, el decano de la Universidad de Kabul informó que habían sido reintegrados a sus cargos y a la categoría que tenían anteriormente. Además, informó que en el proceso de reconciliación nacional se preveía la reintegración de los docentes que vivían en el extranjero, a los que se ofrecía

/...

todo tipo de garantías de seguridad personal. Sólo un profesor declaró haber recibido una invitación de esa naturaleza. Al respecto, el Relator Especial comprobó que el profesor Kakar, que quedó en libertad después de estar preso durante un tiempo, conversó libremente con él en su visita a Kabul.

g) Derechos económicos y sociales

74. En sus informes anteriores (especialmente en el documento A/41/773, párr. 95), el Relator Especial se refiere en términos generales al método de análisis de este tema. Cabe destacar la información sobre los esfuerzos desplegados por las autoridades afganas en las esferas económica y social, que se presenta a continuación:

i) Sector económico

75. En abril de 1987 se aprobó una ley que rige las inversiones en el sector privado con el fin de coordinar la política económica relativa a las inversiones nacionales y extranjeras en este sector. Se ha creado una oficina central para el desarrollo y el fomento de la inversión privada con miras a coordinar las actividades de los sectores público, privado y semipúblico (Oficina Central de Desarrollo y Fomento de la Inversión Privada).

76. La Oficina depende de una Comisión Permanente, única facultada para decidir la creación o la abolición de empresas privadas. Un Comité de Coordinación se encarga de evaluar los proyectos antes de someterlos a decisión final.

77. Según las declaraciones del Presidente y Director General de la Oficina, en junio de 1987 existían en todo el país 421 empresas privadas que empleaban a 8.848 personas y giraban con un capital de 10.200 millones de afganis. Las actividades del sector privado abarcan esencialmente las esferas de los productos químicos, textiles, cuero, tapicería y joyería. En su capítulo II la ley contempla exenciones y subsidios a las empresas privadas. En consecuencia, gozan de exenciones de impuestos durante los primeros años, que se prolongan hasta el sexto año de sus actividades (art. 12); de exenciones de derechos aduaneros (art. 14), de la posibilidad de transferir las utilidades (art. 35), y de la posibilidad de transferir el 60% del sueldo para los empleados extranjeros (art. 36). Por el contrario, el capítulo III de la ley, que se refiere a las obligaciones de las empresas, les impone la obligación de depositar el 15% de las utilidades anuales, luego de deducir los impuestos y antes de distribuir los dividendos, en una cuenta de reserva para la ampliación, innovación, producción y reposición de materiales e indemnización de los riesgos posibles. Además, deben depositar el 2% de las utilidades en una cuenta de reserva de ayuda social a los trabajadores (art. 40). El capítulo IV prevé disposiciones relativas a la solución de conflictos.

78. Los sueldos básicos que se pagan en el sector privado serían equivalentes a los del sector público; no obstante, son más elevados en el sector privado en razón de la atribución de cierto número de ventajas. Por último, el 75% de las personas que trabajan en el sector privado estarían exentas del servicio militar. Además, en 1987 están en ejecución 759 proyectos de desarrollo. En el sector primario, la producción habría aumentado en un 3% y los objetivos del plan se habrían superado ampliamente en el sector agropecuario. Por fin, en el año 1986 el presupuesto de defensa habría representado el 16% del presupuesto anual del Estado.

/...

ii) Sector social

79. Por lo que hace a la ejecución del plan en la economía nacional, se ha declarado que el esfuerzo se orienta particularmente hacia el sector de los servicios sociales (sanidad, educación y habitación). En consecuencia, en 1987, de 13.000 millones de afganis, el 37% se habría destinado a los servicios sociales, mientras que este sector no representaba en 1977 sino el 1%, en 1978 el 16% y en 1986 el 33,3%.

80. En la esfera de los derechos sindicales, la Asociación de Sindicatos de la República Democrática del Afganistán, con 300.000 miembros, se encarga de la elaboración de leyes laborales y de su aplicación. Están representados en ella todos los sectores de actividad salvo el agropecuario. Se ha creado una Comisión de Conciliación entre trabajadores y empleadores, debido a la existencia de un sector público, un sector privado y un sector mixto. Dicha Comisión controla la aplicación de los convenios colectivos cuyas disposiciones preverían la protección de los derechos de los trabajadores cuya defensa está garantizada por la Asociación.

81. Existiría un "salario mínimo garantizado" equivalente a 2.000 afganis por mes. Además, se brindan servicios médicos gratuitos a los trabajadores así como a los miembros de sus familias.

82. Por el contrario, no existiría ni sistema de seguridad social ni disposición alguna que autorizase el derecho de huelga.

h) Otros derechos civiles y políticos

83. El derecho a la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de circulación y la libertad de asociación se ven obstaculizados no solamente por la restricción impuesta a estos derechos como tales, sino también por la situación creada por el conflicto. Se reprimen los movimientos de oposición y las ideas contrarias a las del Gobierno. La libertad de circulación en sí está restringida por las muchas barreras en las calles y las carreteras. Es también de conocimiento general que las fuerzas de oposición imponen restricciones a la circulación, aunque ello no se reconoce oficialmente.

i) El derecho a la libre determinación

84. En sus informes precedentes el Relator Especial ha dado particular importancia al derecho a la libre determinación. Dicho derecho está incorporado en la institución de la Loya Jirgah; desde 1964, la única Loya Jirgah organizada se llevó a cabo en abril de 1985. Una Loya Jirgah así convocada no puede ser considerada verdaderamente representativa del pueblo mientras la población de refugiados en el exterior no pueda participar; el Gobierno ha tratado de convocar Jirgahs locales, pero éstas sólo se podían reunir en zonas controladas por el Gobierno, que presuntamente constituyen el 20% del país.

85. El Relator Especial observó que la población de refugiados en el Pakistán trató de organizar los llamados "Shuras" y se le informó de esfuerzos similares hechos dentro del Afganistán en zonas sometidas al control gubernamental. Estos "Shuras" son elegidos por el pueblo, sin tener en cuenta los partidos ni las facciones. Se podría utilizar tal sistema como primer paso encaminado a organizar

/...

al pueblo afgano que reside fuera del país y de esa manera asegurar un elemento, aunque rudimentario, de respeto al pleno ejercicio del derecho a la libre determinación.

86. En el Afganistán se viene estudiando un proyecto de constitución. Dicho documento se analiza en los párrafos 21 a 29 del presente informe. El capítulo IV del proyecto de constitución se refiere a la Loya Jirgah, que sólo puede adquirir un carácter verdaderamente representativo y universal cuando en ella esté representado todo el pueblo del Afganistán.

87. El Relator Especial examinó el proyecto de constitución con funcionarios del Partido, ex miembros del Parlamento y abogados altamente calificados dentro y fuera del país. El argumento que más esgrimen los afganos de fuera del país es que una nueva constitución no podría garantizar la libre determinación mientras permanezcan en el país las tropas soviéticas. En el Afganistán se le dijo al Relator Especial que el "pequeño contingente de efectivos soviéticos" estaba legalmente en el país, y además con el beneplácito del pueblo, como se desprendía de la declaración hecha por la Loya Jirgah el 25 de abril de 1985.

2. En las regiones no sometidas al control gubernamental

88. El Relator Especial no tuvo oportunidad de visitar las regiones no sometidas al control gubernamental. La única fuente de información de que dispuso sobre la situación de los derechos humanos en tales regiones fueron informes preparados por los movimientos de oposición y por organizaciones no gubernamentales que actúan como organismos de socorro dentro del Afganistán. La información recibida por el Relator Especial en el período que abarca el presente informe refleja una situación que en lo sustancial es la misma que la descrita en sus informes precedentes (especialmente A/41/778, párrs. 85 a 93).

B. Situación de los derechos humanos como consecuencia del conflicto armado en el Afganistán

1. Generalidades

89. En el Afganistán las partes en el conflicto armado son las tropas del Gobierno y las fuerzas soviéticas, por una parte, y la resistencia armada organizada por los movimientos de oposición, por la otra. El mandato del Relator Especial no comprende el estudio del conflicto armado salvo en la medida en que afecta a la situación de los derechos humanos. El Relator Especial tiene conciencia de los diversos aspectos y las consecuencias del conflicto que pudo observar durante su visita a Kabul, Herat y Mazar-i-Sharif, así como durante sus visitas a las víctimas del conflicto, a saber, los refugiados de dentro y fuera del Afganistán y los innumerables pacientes de los hospitales situados dentro y fuera del Afganistán.

90. En su informe precedente a la Asamblea General, el Relator Especial señaló que la situación creada por el conflicto no había variado en grado importante (A/41/778, párr. 54). Las fuerzas gubernamentales y soviéticas tratan de interrumpir el tránsito en las rutas utilizadas por las fuerzas de oposición y los

/...

refugiados; tratan además de destruir las fuentes de suministro de los movimientos de oposición, de eliminar de ciertas regiones las fuerzas de oposición y de mantener bajo su control las grandes ciudades.

91. A comienzos de 1987 el Gobierno anunció una cesación del fuego unilateral, que fue aceptada por las fuerzas soviéticas. Esta cesación del fuego inicialmente anunciada por seis meses, se prorrogó por seis meses más en julio de 1987. El Relator Especial analizó la declaración de la cesación del fuego en su último informe a la Comisión de Derechos Humanos (E/CN.4/1987/22, párr. 41) y dijo que "podría ser un preludio a una situación pacífica". Sin embargo, los movimientos de oposición no aceptaron la cesación del fuego y el Relator Especial señaló que el conflicto armado parecía haberse intensificado en los últimos meses, como lo confirmaban los muchos informes de lucha intensa que se había llegado a su conocimiento.

2. Pérdidas producidas por bombardeos y otros actos de guerra

92. Según diversas fuentes los combates entre tropas afganas y los miembros de los movimientos de oposición se han intensificado, en particular desde el mes de mayo de 1987, en las provincias de Qandahar, Paktia, Baghlan, Ghazni, Vardak y el distrito de Maydan, lo que explicaría el gran número de víctimas de guerra admitidos en los hospitales visitados por el Relator Especial en Quetta (Beluchistán). Por el contrario, el número de heridos que en el mismo período llegaron a los hospitales de Peshawar (Provincia de la Frontera Noroccidental) es menos elevado en razón, según parece, de la menor intensidad de los combates en las provincias limítrofes de esta zona. Por ello, en un solo puesto de primeros auxilios del CICR para las víctimas afganas de Chaman (Beluchistán) hubo 164 víctimas en mayo, 70 en junio, 113 en julio y 73 en agosto de 1987. La situación era análoga en el puesto de primeros auxilios de la Media Luna Roja árabe saudita. Por el contrario, en el puesto de primeros auxilios del CICR en Miram Shah (Provincia de la Frontera Noroccidental) hubo 17 víctimas en mayo, 7 en junio, 12 en julio y 7 en agosto de 1987. Se observó la misma tendencia en el puesto de primeros auxilios de la Media Luna Roja kuwaití.

93. El Relator Especial oyó alegaciones relativas a la matanza de civiles y la destrucción de casas y considera necesario señalar a la atención de la Asamblea General, a manera de ejemplo, los siguientes presuntos casos que, según se dice, han ocurrido en junio, julio y agosto de 1987:

a) Con el propósito de destruir los núcleos de oposición en una región en que convergen ciertas rutas vitales de suministro que comunican el Afganistán oriental, el central y el septentrional, el Gobierno lanzó una operación que, según se informa, condujo a batallas en el paso de Sanglakh, Maydan, en la Provincia de Wardak, entre el 21 de junio y el 9 de julio de 1987, en que las fuerzas gubernamentales así como las de oposición sufrieron grandes bajas. En represalia, se dice que las tropas gubernamentales bombardearon zonas residenciales civiles de la provincia, demoliendo 100 casas, dando muerte a unos 50 civiles y destruyendo los cultivos;

b) El 24 de julio de 1987, durante una operación por tierra y por aire, en el Hindu Kush, Jangal, Areegh, Almalik, Dali, Haiderabad, Alja y otras aldeas de la Provincia de Fariab, quedaron destruidas cientos de casas y varios civiles resultaron muertos;

c) Entre el 7 y el 15 de agosto de 1987, en otra operación por tierra y por aire, en la zona de Shakardara y las aldeas vecinas de la Provincia de Kabul, resultaron muertas 85 personas, la mayoría de las cuales eran mujeres, niños y ancianos. Según testigos oculares, quedó destruido del 20 al 40% de las casas y el ganado fue diezmado.

94. El Relator Especial pudo examinar las situaciones de la intensa lucha, sus causas y consecuencias, con el fin de determinar quién era responsable. Los movimientos de resistencia están dotados de armas modernas tales como misiles antitanques y misiles tierra-aire. Hubo muchos informes de bajas causadas por los movimientos de resistencia. Varios aviones han sido derribados, causando la muerte de civiles inocentes. Se enseñaron al Relator Especial fotografías de mujeres y niños que quedaron mutilados a raíz de ataques con cohetes en Kabul, atribuidos a las fuerzas de la resistencia.

95. El Relator Especial visitó hospitales en Kabul, en el Beluchistán y en la Provincia de la Frontera Noroccidental. En Kabul visitó cierto número de hospitales (véase el párrafo 3 supra). En el hospital Wazir Akbar Khan, el Relator Especial observó más de 100 civiles lesionados a consecuencia de las hostilidades. Sin embargo, las conversaciones con varias de estas personas no aclararon si sus heridas fueron causadas por las fuerzas de oposición. Las lesiones causadas por minas eran las más frecuentes. El Relator Especial visitó el Hospital de las Fuerzas Armadas de Kabul, con una capacidad declarada de 450 camas; el hospital está colmado con soldados heridos en las hostilidades. El Relator Especial observó entre los pacientes unas ocho personas que se dijo que eran luchadores de la oposición heridos que se estaban recuperando en una sala separada en que montaba guardia un soldado. Se dijo al Relator Especial que se les haría comparecer ante el poder judicial una vez que se hubiesen recuperado.

96. Como se señala en el párrafo 8 supra, el Relator Especial visitó cierto número de hospitales en el Pakistán. Estudió las fichas clínicas de los niños y los ancianos heridos, visitó los puestos de primeros auxilios y recibió información estadística sobre el movimiento de personas lesionadas en estos hospitales y puestos. Observó que, en comparación con informes recientes, hubo un aumento notable del número de heridos o, por lo menos, no hubo disminución del número de personas recién heridas. Se explicó que el aumento del número de heridos se debía a la intensidad de los combates en diversas provincias.

97. Tras el estudio estadístico sobre las víctimas civiles durante 1986 presentado en el último informe a la Asamblea General (A/41/778), el Relator Especial ha recibido información de la Bibliotheca Afghanistanica Foundation (Liestal, Suiza) según la cual el número de víctimas civiles desde fines de 1986 hasta septiembre de 1987 ascendería a 14.172 personas. La mayoría de las víctimas de que se informa procede de las provincias de Kandahar, Konar, Kunduz y Laghman.

98. El Relator Especial tomó nota de informes de la destrucción de casas, mezquitas, ganado y cultivos atribuida a las fuerzas armadas y a los movimientos de oposición por igual. Según los datos recopilados por la Bibliotheca Afghanica Foundation durante el período que abarca el presente informe las actividades de las fuerzas armadas causaron más pérdidas de ganado que las actividades de los movimientos de oposición. En varios casos no se pudo establecer la responsabilidad de los daños.

3. Empleo de minas antipersonal y de juguetes con dispositivos explosivos

99. El Relator Especial observó varias heridas causadas por minas antipersonal de que fueron víctimas soldados y civiles por igual. Los informes relativos al uso de juguetes con dispositivos explosivos han disminuido durante el período que abarca el presente informe.

100. En un museo de guerra de Kabul se mostraron al Relator Especial diferentes armas que presuntamente se habían incautado de las fuerzas de la resistencia, incluidos juguetes con dispositivos explosivos y pertrechos análogos a los utilizados para las armas químicas. En el hospital Wazir Akbar Khan, de Kabul, el Relator Especial estudió seis informes médicos en que se describía que los pacientes se habían visto afectados por armas químicas en la Provincia de Ghazni.

4. Actos de brutalidad y otros ejemplos de actos de guerra contrarios a las normas humanitarias; derecho internacional

101. Durante el período que se examina el Relator Especial recibió escasa información relativa a actos de brutalidad atribuidos a las fuerzas armadas. Sin embargo, se le informó del caso de un joven capturado por tropas soviéticas en Kandahar en septiembre de 1986, a quien le habían rociado con combustible diesel y le habían prendido fuego. El joven había sufrido graves quemaduras en la cabeza y el torso, así como lesiones en los ojos. El Gobierno presentó al Relator Especial una lista de los actos de brutalidad atribuidos a los miembros de los movimientos de oposición.

102. La situación de los prisioneros no parece haber variado en comparación con la descrita en el informe precedente del Relator Especial a la Asamblea General (véase A/41/778, párrs. 76 y 77). Al CICR le resulta difícil visitar a los prisioneros retenidos por el Gobierno y a los retenidos por los movimientos de oposición; tampoco el Relator Especial ha tenido oportunidad de visitarlos. Se le dio una lista de presos soviéticos cuyo paradero y suerte no se conocían.

103. En ese contexto, el Relator Especial oyó a ciertos comandantes de las fuerzas de oposición que rechazaban categóricamente toda obligación dimanante del Convenio de Ginebra. Según ellos una guerra de venganza, tal como el conflicto actual, era de carácter "total".

104. El Relator Especial observó un aumento importante del número de actos de terrorismo contra los afganos dentro y fuera del país. Se ha informado de más de 4.000 muertes entre la población de refugiados civiles de las zonas fronterizas y

de las ciudades del Pakistán. Se han derribado aviones civiles sobre suelo afgano. Se ha denunciado la detonación de bombas colocadas en lugares públicos muy concurridos, en particular en Kabul. Un comandante de un movimiento de oposición ha recibido una carta bomba. Dichos acontecimientos coinciden con informaciones sobre la intensificación de los ataques en el territorio pakistaní; se ha informado de 150 ataques aéreos y de artillería, que causaron daños y muertes entre los refugiados y la población civil.

105. Durante su visita a Herat, el Relator Especial pudo ver por sí mismo los daños causados a la Gran Mezquita Jami, a que se refirió en su último informe a la Asamblea General (A/41/778, párr. 79), atribuidos por las autoridades afganas a los movimientos de oposición. No obstante, no tiene indicaciones concretas de quién es responsable de los daños. No pudo visitar la ciudad antigua de Herat que, según se le informó, había sufrido extensos daños.

V. CONCLUSIONES

106. Por primera vez desde su nombramiento en 1984, el Relator Especial recibió una invitación para visitar el Afganistán en marzo de 1987 y la aceptó con agradecimiento. Durante su estadía en el Afganistán, visitó Kabul, Herat, Mazar-i-Sharif y Balkh. También había pedido visitar las regiones de Kandahar y Khost, pero no fue posible. El Gobierno del Afganistán ofreció al Relator Especial toda cooperación posible dadas las circunstancias.

107. Como en años anteriores, pudo visitar campamentos de refugiados y hospitales en el Pakistán. El Gobierno del Pakistán volvió a brindarle la más amplia cooperación. El Relator Especial está así en mejores condiciones que en años anteriores para evaluar la situación de los derechos humanos en el Afganistán.

108. La actual situación de los derechos humanos en el Afganistán se caracteriza por los intentos del Gobierno de aplicar una política que llama "de reconciliación nacional". Al aplicar esa política, el Gobierno ha adoptado una serie de medidas; en particular, ha proclamado una amnistía general, ha hecho un llamamiento para el regreso de los refugiados y ha declarado un cese del fuego unilateral.

109. El concepto de "reconciliación nacional" es aceptado por muchas organizaciones e individuos en zonas que están bajo el control del Gobierno. Sin embargo, líderes políticos y portavoces de la población refugiada en el Pakistán lo cuestionan y rechazan. Sostienen que esa política carece de credibilidad porque es propuesta por un régimen que ha violado en gran medida los derechos humanos en el pasado y que, en todo caso, no puede aceptarse como una declaración de política seria hasta tanto las tropas soviéticas no se hayan retirado del Afganistán.

110. Dejando a un lado la especulación sobre los motivos de tal política, el Relator Especial reconoce que la situación de los derechos humanos ha mejorado en cierta medida en las zonas que están bajo el control del Gobierno, si se la compara con la situación descrita en informes anteriores; sin embargo, en las zonas de combate se siguen produciendo violaciones graves del derecho humanitario y los derechos humanos.

/...

111. En las zonas que están bajo el control del Gobierno se ha reducido el número de presos políticos, se han liberado prisioneros como resultado de amnistías, las manifestaciones religiosas no están restringidas, en los últimos seis meses no se han recibido nuevos informes de torturas en el sentido de los instrumentos internacionales, se ha permitido al CICR inspeccionar la prisión de Pol-i-Charkhi y se está estudiando la posibilidad de colaborar más estrechamente con el CICR. El Gobierno está tratando de convencer a los refugiados para que regresen y de facilitar su integración en la sociedad afgana; en la medida de lo posible, los presos liberados son restituidos a sus puestos de trabajo anteriores y en algunas zonas el Gobierno está tratando de convencer a sus oponentes de la sinceridad del régimen mediante el diálogo en lugar de la confrontación militar.

112. Todavía hay muchos presos políticos que están cumpliendo sentencias dictadas en procedimientos que no puede considerarse que hayan estado de acuerdo con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, y los períodos de arresto anterior al juicio que se permiten son muy superiores a los que establecen las normas internacionales. Además, las condiciones de reclusión durante esos períodos no se ajustan al concepto de prisión preventiva, y la brutalidad en las prisiones sigue siendo algo común. Además, las condiciones de reclusión de los presos que están cumpliendo condena no están de acuerdo, en muchos aspectos, con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, y no se respetan plenamente los demás derechos civiles y políticos.

113. Continúa el conflicto armado - la otra faceta de la situación de los derechos humanos en el Afganistán - que sigue causando muerte y destrucción material. Da lugar a brutalidades y de acuerdo con los informes el tratamiento de los reclusos no se ajusta al derecho humanitario. De hecho, el conflicto armado ha cobrado mayor intensidad en los últimos meses. Las fuerzas de resistencia, que están mejor equipadas que antes, también ocasionan daños en objetivos civiles. La cifra que se ha dado de víctimas civiles en el período que va de fines de 1986 a agosto de 1987 es de 14.272.

114. Una nueva característica del conflicto es el aumento de los actos de terrorismo en contra de afganos que se cometen dentro y fuera del Afganistán. Esto representa un nuevo peligro para la vida, la libertad y la seguridad de las personas. Durante el período en estudio se informó de más de 4.000 muertes en las zonas fronterizas y en ciudades del Pakistán. Varios ataques aéreos y de artillería en el territorio del Pakistán pusieron en peligro vidas humanas y bienes.

115. El número de refugiados - otro resultado del conflicto armado - en el Pakistán y en la República Islámica del Irán disminuyó con posterioridad al último informe del Relator Especial a la Comisión de Derechos Humanos (E/CN.4/1987/22) y ha quedado en unos 5,5 millones. La política del Gobierno para convencer a los refugiados de que regresen ha hecho volver de distintos países a unas 82.000 personas, y el Relator Especial entrevistó a algunas de ellas. El Relator Especial no pudo estudiar en detalle el proceso de regreso, pero observó que los esfuerzos del Gobierno por lograr el regreso de los refugiados se vieron obstaculizados por la situación imperante.

116. En el nuevo proyecto de constitución no existen verdaderas garantías para el cumplimiento efectivo de toda la gama de derechos humanos, y los tribunales

/...

especiales y fiscales especiales creados por los decretos revolucionarios pueden ser mantenidos "legalmente". No se prevé la posibilidad de apelar ante una autoridad independiente en caso de arresto arbitrario y la Loya Jirgah que se prevé en el proyecto de constitución parece carecer de la universalidad que es parte de su propia esencia.

117. Aun si se aprobara el proyecto de constitución en su versión actual, su aprobación no podría considerarse como un acto de libre determinación a menos que la población refugiada estuviera auténticamente representada en el "poder constituyente".

118. Con independencia de la legalidad u otra justificación de la presencia de tropas soviéticas en el Afganistán, el hecho es que su presencia es la razón principal de la intensidad del conflicto armado y de la existencia de 5,5 millones de refugiados, y es un obstáculo al libre ejercicio del derecho de libre determinación. Las mejoras en la situación de los derechos humanos en comparación con un año atrás son positivas, pero la estabilidad de la situación de los derechos humanos de conformidad con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos depende de la adopción de ciertas medidas sustantivas, como la reforma del sistema judicial, especialmente la derogación de la figura del Fiscal Revolucionario, la creación de un Loya Jirgah de representación universal y el regreso en gran escala de los refugiados. Su regreso y el ejercicio del derecho de libre determinación dependen a su vez de que termine el enfrentamiento militar y se retiren las tropas soviéticas.

VI. RECOMENDACIONES

119. La situación de los derechos humanos en el Afganistán es producto de la situación política general imperante en el país, es decir, de la existencia de un sistema de gobierno que, en opinión de gran parte de la población, no es la autoridad de gobierno legítima que pueda garantizar el goce de los derechos humanos para todos, y de la presencia constante de tropas soviéticas participando en un conflicto armado que afecta a gran parte de la población. Además, una parte de la población no acepta la opinión de que esas tropas están legalmente en el país. El pleno goce de todos los derechos humanos para todo el pueblo sin ninguna discriminación presupone una solución política del conflicto, incluido el retiro de las tropas soviéticas. Toda recomendación que no tome en cuenta este aspecto netamente político de la situación imperante en el país sólo tendrá un valor parcial.

120. Las facultades del Relator Especial no le permiten formular recomendaciones de índole política; sin embargo, en sus recomendaciones hace alusión a elementos políticos porque los derechos humanos y las estructuras políticas están relacionados. Gran parte de la población opina que el retiro de las tropas soviéticas es una condición previa para el ejercicio libre y efectivo del derecho de libre determinación, con el alcance que le da el artículo 1 de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.

121. Otra condición esencial es el regreso voluntario de los refugiados. El Gobierno del Afganistán debería facilitar ese regreso mediante una amnistía general

/...

que se aplicara de manera sencilla y directa. Ese regreso no debe verse afectado por ninguna presión o fuerza ejercida desde el exterior del Afganistán.

122. Mientras no se cumplan esas condiciones para el pleno restablecimiento de los derechos humanos en todo el país, cualquier recomendación que se formule tiene sólo un valor parcial. La reconciliación en sí misma es un elemento positivo para lograr mejoras en la situación de los derechos humanos. El proceso de reconciliación en parte del país es sólo un enfoque limitado del restablecimiento de los derechos humanos en el Afganistán para todos los afganos.

123. El Relator Especial desea insistir en que sus recomendaciones no deben interpretarse como una fórmula de alternativa en relación con lo reseñado anteriormente. La situación actual de los derechos humanos en ciertas zonas del país donde pueden ciertamente reconocerse ciertas mejoras podría constituir un primer paso en el proceso de restituir los derechos humanos en el Afganistán. Con esa idea presente, el Relator Especial formula las siguientes recomendaciones:

- a) Los presos políticos que han sido liberados como consecuencia de la amnistía deberían recibir un documento auténtico como prueba de su liberación;
- b) Se debería dar a esos ex presos el derecho a ser restituidos en sus puestos y a reiniciar el ejercicio de sus profesiones;
- c) Se debería indemnizar a los ex presos cuyas causas sean revisadas y no se les siga considerando culpables;
- d) Todas las partes en el conflicto deberían aplicar plenamente el derecho humanitario; los miembros de la resistencia que sean capturados deberían ser tratados como prisioneros de guerra de acuerdo con las Convenciones de Ginebra;
- e) Se debería permitir al CICR pleno acceso a todos los presos, prisiones o lugares de reclusión que estén bajo el control de los movimientos de resistencia;
- f) El Gobierno debería concertar un acuerdo con el CICR lo antes posible para permitir que esa organización inspeccione las prisiones y los lugares de reclusión y vea a los presos con regularidad, de conformidad con sus criterios establecidos.

124. El mandato del Relator Especial debería autorizarlo a visitar las zonas del Afganistán que no están bajo el control directo del Gobierno.

125. Con respecto al proyecto de constitución:

- a) Se debería preparar una nueva constitución en cooperación con representantes de la población refugiada;
- b) Las disposiciones de la constitución relativas a los derechos humanos deben ampliarse a fin de que incluyan las garantías establecidas en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (véase el anexo de la resolución 2200 (XXI) A de la Asamblea General), que establece que:

"...

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y a desarrollar las posibilidades de recurso judicial;

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso."

c) Se deberían derogar o enmendar las normas de la constitución que permiten la perpetuación del sistema de "justicia revolucionaria" para asegurar el control por autoridades independientes.

126. Las normas de la ley que rige el arresto durante la investigación permiten mantener bajo arresto por períodos hasta de seis meses, e incluso más, a personas sospechosas de haber cometido delitos contra la seguridad del Estado las cuales no tienen recurso o amparo alguno contra tal arresto. Se deberían designar magistrados independientes para que determinaran la legalidad de tales arrestos e investigar las condiciones imperantes en los lugares de reclusión y se debería reducir drásticamente la duración del arresto.

127. Por último, el Relator Especial exhorta a las partes en el conflicto a considerar la posibilidad de recurrir al diálogo y lograr la unidad por medios pacíficos.
